

RESUMEN

Esta Tesis se propone analizar políticas locales llevadas adelante en ciudades de AL para indagar acerca de su contribución a la Cohesión Social Urbana (CSU). Se aplica un instrumento desarrollado a tal fin denominado Matriz de Contribución a la Cohesión Social Urbana (MCCSU) con el propósito de conocer, a partir de un estudio comparado, el comportamiento de la misma y proponer un modelo de intervención en los territorios excluidos.

El marco conceptual que recorre la Tesis es el de la cohesión social relacionada con la tradición histórica latinoamericana. Se considera la CSU como expresión de la combinación de exclusión y segregación (Subirats, 2006) y la gobernanza como implicación de múltiples actores en la configuración de la política pública, poniendo en valor el sentido de pertenencia y el empoderamiento societal.

El trabajo parte del reconocimiento de dos hechos: la existencia en las ciudades de fenómenos que se materializan en niveles más o menos (in)soportables de exclusión, pobreza, violencia y desarraigo que atentan contra la CSU y la búsqueda en algunas ciudades, de alternativas de intervención territorial con el fin de avanzar hacia ciudades más cohesionadas. En este marco surgen interrogantes de gran alcance: ¿Es posible contribuir a la CS a partir de intervenciones territoriales urbanas en zonas excluidas? ¿Qué diseños son los más apropiados para ese fin?

Esta Tesis pretende avanzar en la búsqueda de respuestas a estas situaciones, y lo hace aplicando la MCCSU en un estudio comparado de tres políticas territoriales: Proyectos Urbanos Integrales de Medellín (Colombia), Favela Barrio de Río de Janeiro (Brasil) y Rosario Hábitat de Rosario (Argentina).

Sus principales resultados son los siguientes: se verifica la presencia de perspectiva estratégica en el diseño de las políticas territoriales y una clara orientación hacia los territorios excluidos. En algunas de las experiencias se demuestra con más claridad la contribución a la CSU a partir de intervenciones de conectividad y el desarrollo de espacio público. Resulta muy consolidada la concurrencia de instituciones, acciones y recursos en el territorio y es ampliamente reconocida la multi dimensionalidad como modalidad de

intervención; aquí la dimensión institucional resulta determinante en tanto se pone de relieve la necesidad de un Estado activo, innovador y participativo. Se advierte que la participación social y comunitaria es clave, en tanto la CSU significa un proceso de implicación y empoderamiento societal, al igual que las modalidades de gestión que significan articulación y coordinación entre los actores públicos y entre ellos y los privados.

Los resultados indican una ventaja de la dimensión urbano ambiental sobre la económica social, señalando una tendencia más fiscalista: dotación de infraestructuras de servicios básicos y de equipamientos culturales y deportivos y, en menor incidencia, educativos, sanitarios y para la promoción de empleo. Es notable la fortaleza que se muestra en el desarrollo de espacio público como lugar de encuentro y empoderamiento ciudadano. En tanto la dimensión socio económica resulta comparativamente la más débil; poniendo en evidencia las dificultades para incidir en los componentes más estructurales, como son la generación de empleo, la inserción educativa y la promoción de la salud. El acceso a la justicia, la disminución de la brecha digital y la promoción de empleo, son los componentes recurrentemente más débiles. El estudio indica que la integralidad contribuye a la CSU; si bien no arroja un comportamiento homogéneo, su contribución es mayoritariamente muy significativa, lo que indica un avance sustantivo en la comprensión de la complejidad de la problemática que se aborda y de los límites y consecuencias negativas de la gestión sectorial y fragmentada.

Finalmente a partir del estudio comparado que somete a examen a la MCCSU, se la propone como un modelo de diseño de intervención para los territorios excluidos, organizando de manera simple las dimensiones y componentes implicados en la complejidad territorial; establece un número de componentes comunes a los territorios excluidos, y le da adaptabilidad desde su especificidad.

El modelo propuesto se asume como una herramienta de carácter político, involucra múltiples actores y la centralidad en la agenda de gobierno. No se trata de un modelo acabado y señala las regularidades sin eliminar las tensiones provenientes de las contradicciones del campo de intervención.